



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., trece de febrero de dos mil veintitrés.

PROCESO	Servidumbre de energía eléctrica
DEMANDANTE	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
DEMANDADO	William de Jesús Tamayo Palacio
PROCEDENCIA	Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín
CUDR	05001-31-03-012–2022-00374-01
RADICADO INTERNO	100-22
PROVIDENCIA	034-23
DECISIÓN	Solo es procedente que el juez inadmita la demanda para exigir los requisitos legalmente establecidos y, en consecuencia, que la rechace en el evento de no cumplirse los mismos. REVOCA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandante en contra del auto del 14 de octubre de 2022, mediante el cual se rechazó la demanda de servidumbre de la referencia, por no allegarse la constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 621 del C. General del Proceso, que exigió en auto inadmisorio del cinco del mismo mes y año.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. presentó demanda de imposición de servidumbre eléctrica en contra del señor William de Jesús Tamayo Palacio, mediante la cual pretende que esta se imponga sobre el predio Peñas Blancas, ubicado en la vereda Rionegro, La Tigra, corregimiento de Cuesta Rica, municipio de Rionegro, departamento de Santander, identificado con matrícula inmobiliaria número 300-9665, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, sobre un área de 164.053 metros cuadrados.

2.- Trámite. Una vez recibida la demanda, el juzgado de primera instancia, en auto del cinco de octubre de 2022, la inadmitió con el fin de que se aportara la constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 621 del C. General del Proceso.

Allí se anotó que no era viable aplicar el artículo 613 de la citada normativa, en tanto allí se regula la conciliación en materia administrativa, siendo este trámite puramente civil; además, porque no resultaba de recibo el argumento atinente a la medida cautelar, en el entendido de que esta medida se decreta de oficio en este tipo de juicios, en los términos del artículo 592 ibídem.

Arguyó que el Código General del Proceso reguló el trámite de procesos de servidumbre dentro del título verbal, luego, al no tratarse de un proceso divisorio, expropiación o de aquellos en donde sea obligatoria la citación de indeterminados, además, de tratarse de un asunto conciliable, resultaba necesario acreditar el agotamiento de esta audiencia prejudicial.

Dentro del término concedido en la inadmisión para allegar el requisito, la apoderada de la parte demandante manifestó que el presente asunto se encuentra sometido a un trámite especial, por tanto, por contener normas de naturaleza especial tiene aplicación preferencial sobre leyes generales, y, en ese sentido, no es procedente enmarcarlo en la Ley 640 de 2001.

Dijo que las expropiaciones y las servidumbres de carácter legal, tienen en común que son procesos que se encaminan a lograr una efectiva ejecución de los proyectos declarados de utilidad pública e interés social, por lo que, la norma especial propende por la agilidad de los trámites tendientes a la formalización del derecho de servidumbre; y el agotar etapas previas de conciliación para acudir a la jurisdicción representaría demoras y grave riesgo para la construcción y puesta en operación de los proyectos.

Advirtió que previo a acudir a las vías judiciales, presentaron oferta económica formal al demandado, el 26 de mayo de 2022, pero no fue posible llegar a un acuerdo directo.

3.- El auto apelado. Luego, por providencia del 14 de octubre de 2022, el *a quo* rechazó la demanda, señalando no estar de acuerdo con los argumentos esbozados por la actora, porque el artículo 592 del C. General del Proceso es una norma posterior a la Ley 56 de 1981, y es la que ahora regula el procedimiento de esta clase de procesos.

4.- La apelación. Oportunamente la vocera judicial de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que, el despacho no tuvo en consideración todos los elementos normativos para realizar el examen del caso en particular.

Expuso que no se tuvo en cuenta la jerarquía normativa, que implica el criterio de aplicación preferencial de la norma especial sobre la norma general; particularmente porque en este caso la ley regula la servidumbre legal, dicta normas sobre obras públicas de generación de energía eléctrica, circunstancia que hace necesario la aplicación de unas reglas diferentes. Concretamente, la ley 56 de 1981, reglamentada por el Decreto 1075 de 2015, con remisión al Código General del Proceso, solo en los casos de vacíos manifiestos.

Dijo que las servidumbres a que hace referencia la sentencia de constitucionalidad C-1195 de 2001, que cita el juzgado, no son otras que la servidumbre predial o simple servidumbre, regulada por el Código General del Proceso; sin embargo, la imposición de servidumbre denominado proceso especial de *“imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica”*, es una servidumbre legal, regulada por la ley 56 de 1981, y sus decretos reglamentario 2580 de 1985 y 1073 de 2015, y en ese sentido, conforme lo señala el artículo 368 del C. General del Proceso, debe dársele un trámite especial.

Refirió que, si bien el juzgado de primer grado consideró que no era pertinente aplicar en este caso el artículo 613 del C. General del Proceso, por tratarse de la conciliación en materia administrativa, haciendo una interpretación, el artículo también se refiere *“...como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública...”*. Y en este caso, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA ESP, es una persona jurídica de derecho público, mixta, constituida

como sociedad por acciones.

Señaló que el juzgado se abstiene injustificadamente de resolver de fondo, soportando su decisión en un argumento que se aparta del verdadero sentido y objeto que enmarca el procedimiento de la imposición de servidumbre legal. Que, no se realiza una debida interpretación de las normas, desconociendo que la presente demanda tiene por objeto el desarrollo y ejecución de una obra de utilidad pública e interés social, en cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado Colombiano, como lo es la prestación del servicio público de energía.

La *a quo* no repuso su decisión y concedió la apelación interpuesta en forma subsidiaria mediante proveído del dos de noviembre de 2022.

CONSIDERACIONES

1.- Inadmisión de la demanda. En aras de encaminar en legal forma el curso de determinado proceso y evitar futuras nulidades, el legislador le confirió al Juez, como Director del Proceso, la potestad de exigir oficiosamente y desde los inicios del mismo, que se subsanen los defectos que presente la demanda, para lo cual la inadmitiría, señalando los requisitos formales o los anexos de los que carezca. Eso contribuye, además, con la demanda en forma, que es un requisito formal para resolver de fondo la causa y contribuye con el debido proceso, en tanto garantiza al demandado su posibilidad de réplica.

El precepto 82 del C G P, enuncia los requisitos generales que debe contener una demanda, cuyo cumplimiento le brinda al juez de conocimiento las bases sobre las cuales se adelantará determinado proceso y lo que se pretende con el mismo. Con la misma finalidad, se estableció en el artículo 84 *ibídem*, los anexos que necesariamente deben acompañarse a la demanda, para que desde los inicios del trámite respectivo se pruebe la existencia de los involucrados en el proceso, su representación legal y judicial u otra circunstancia especial en determinada clase de procesos.

La falta de cualquiera de estos requisitos faculta al funcionario al que se le haya asignado determinado asunto, como regla general, a inadmitir la demanda y conceder a la parte demandante el término de cinco (5) días para que subsane los defectos de los cuales adolece la misma y que deben ser señalados en la misma providencia.

Por su parte, consagra el artículo 89 del CGP, que *“con la demanda deberá acompañarse copia para el archivo del juzgado, y tantas copias de ella y de sus anexos cuantas sean las personas a quienes deba correrse traslado...”* (Suspensivos de este Despacho).

Una vez cumplido el término sin que el demandante subsane los defectos indicados por el Juez, éste deberá rechazarla, al tenor de lo establecido en el artículo 90 inciso 4 del mismo código.

2.- El proceso de servidumbre. Según lo establecido en el artículo 879 del Código Civil, la servidumbre es un gravamen que se impone sobre un inmueble para que este último otorgue un beneficio o un servicio a otro inmueble cuya propiedad está en cabeza de persona diferente. Del mismo modo, el artículo 897 ibídem, señala que las servidumbres legales son relativas al uso público.

En relación con la servidumbre de conducción de energía, según el artículo 25 de la Ley 56 de 1981, esta obliga al propietario del predio permitir el paso, por vía aérea, subterránea o superficial, las líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico. Es decir, por tratarse de una servidumbre legal, al momento de imponerse tal servidumbre se constituye una limitación al dominio sobre el inmueble sirviente, o sea que éste no se entiende, en ningún momento, propietario del predio ni derecho semejante se desprende de las facultades que tiene sobre este respecto de su uso, goce y disposición, siempre respetando la servidumbre que sobre él se ha constituido. Se tiene con esto entonces, que el derecho que se consagra bajo la constitución de una servidumbre es un derecho accesorio y no independiente.

Ahora, frente al procedimiento de imposición de servidumbre la Corte Suprema de Justicia, en SC4658-2020, expediente n° 23001-31-03-002-2016-00418-01, 30 de noviembre de 2020, señaló:

“...Acorde con el artículo 18 de la Ley 126 de 1938, la de conducción de energía eléctrica es una servidumbre de estirpe legal, que deben soportar a los predios por los cuales deben pasar las líneas respectivas», y que, a voces del canon 25 de la Ley 56 de 1981, supone para las entidades públicas que tienen a su cargo la construcción de centrales generadoras, líneas de interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, la facultad de pasar por los predios afectados, por vía aérea, subterránea o superficial, las líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico, ocupar las zonas objeto de la servidumbre, transitar por las mismas, adelantar las obras, ejercer la vigilancia, conservación y mantenimiento y emplear los demás medios necesarios para su ejercicio».

Ahora bien, como el ejercicio de esas prerrogativas implica una intrusión (justificada) del Estado en la propiedad privada, la imposición de la servidumbre exige -por vía general- la mediación de los jueces, con el fin de que estos asignen el ius in re aliena a la entidad de derecho público y determinen, con" fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, una compensación razonable para el propietario del predio sirviente.

Pero esa controversia no podría adelantarse por la senda de los procesos declarativos que entonces preveía el ordenamiento jurídico (ordinario, abreviado, verbal y verbal sumario), pues estos incluían una serie de etapas que, amén de innecesarias frente al restringido debate que se suscita en estos litigios, eran incompatibles con el vertiginoso avance que ameritan las obras públicas de infraestructura energética.

Para atender esa problemática, la misma Ley 56 de 1981 estableció un procedimiento especial, que luego fue desarrollado en el Decreto Reglamentario 2580 de 1985, actualmente compendiado en el Capítulo VII, Sección 5, del Decreto 1073 de 2015, y cuyo canon 2.2.3.7.5.3...”

Resalta la Sala que la norma trasuntada no pretendía instaurar formalidades adicionales a las establecidas para los juicios declarativos, tal como ocurre con las “disposiciones especiales” que contemplan las codificaciones adjetivas para los trámites de resolución de compraventa, pertenencia, rendición provocada de cuentas; entrega de la cosa por el tradente al adquirente, declaración de bienes vacantes o mostrencos, o restitución de inmuebles arrendados, entre otros.

En realidad, la pauta legal que previamente se transcribió establece las formas propias del proceso de imposición de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, entendidas como las reglas que, de conformidad con la naturaleza de cada juicio, determinan cada una de las etapas propia de un proceso y que, a su vez, se constituyen en las garantías de defensa y de seguridad jurídica para los intervinientes en el respectivo litigio» (CC, C-140 de 1995).

*Expresado de otro modo, **este proceso declarativo contiene una sistemática diferenciada respecto de los demás que prevé la codificación adjetiva civil**; ello lo evidencia la reglamentación heterogénea de las formas de notificación, la necesaria realización de una inspección judicial dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la demanda, los breves términos de los traslados, la imposibilidad de presentar excepciones, y el método de fijación de la compensación correspondiente...*” (Negrilla intencional).

2.- Caso concreto. En el asunto objeto de estudio, el problema jurídico a resolver será entonces, si el proceso especial de servidumbre de conducción de energía eléctrica, requiere agotar la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad.

En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia citada en las consideraciones, el proceso de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica es de carácter legal y tiene un procedimiento especial consagrado en la Ley 56 de 1981, que luego fue desarrollado en el Decreto Reglamentario 2580 de 1985 y actualmente se encuentra compendiado en el Capítulo VII, Sección 5, del Decreto 1073 de 2015. Por esta razón, no le asiste razón al juzgado de primer grado, cuando adujo que, por ser el artículo 592 del C. General del Proceso una norma posterior a la Ley 56 de 1981, es esta la que ahora regula el procedimiento de esta clase de procesos.

Así, siguiendo la normativa que regula este proceso especial de servidumbre, hay que advertir que la calidad de demandante la tiene la entidad de derecho público que adopte el proyecto y ordene su ejecución, y como demandados, serán las personas titulares de derecho reales principales sobre los bienes afectados con la servidumbre.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º, numeral 1 del Decreto 2580 de 1985, en este proceso procede como medida cautelar la inscripción de la demanda, la cual se decreta en el auto admisorio, si la parte demandante así lo peticiona.

Con todo, para esta Sala no son de recibo los argumentos expuestos por el Juzgado de primera instancia, acorde a las disposiciones especiales del trámite de

servidumbre eléctrica previsto por el decreto 1073 de 2015, pues la inscripción de la demanda no es obligatoria o debe decretarse de oficio como se pretende hacer ver.

Prueba de ello lo es el numeral primero del art. 2.2.3.7.5.3 “1. *En el auto admisorio de la demanda se ordenará correr traslado de ella al demandado, por el término de tres (3) días y se ordenará la inscripción de la demanda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación del inmueble, **si esta petición ha sido formulada por el demandante...***”

En dicha normativa se evidencia que la cautela se decreta siempre y cuando esta petición sea formulada por la parte demandante, escenario en el cual encaja perfectamente la excepción contemplada en el parágrafo primero del art. 590 del C.G.P. “*En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad*”.

Aunado a ello, no se debe perder de vista que, este tipo de procesos, donde la parte actora es una entidad pública están regulados, se repite, por ley especial, y sólo se le aplican las disposiciones generales en lo no regulado por estas, por esta razón, se considera que el artículo 592 del C. General del Proceso no le es aplicable.

Es que tal y como lo explicó la corte en la jurisprudencia arriba transcrita, esta controversia no puede adelantarse por la senda de los procesos declarativos, en tanto estos incluyen unas etapas innecesarias frente al específico procedimiento de este tipo de litigios, pues están encaminados a la prevalencia del interés general y utilidad pública que implican las obras públicas de infraestructura energética; a voces de la corte Suprema de Justicia, “*este proceso declarativo contiene una sistemática diferenciada respecto de los demás que prevé la codificación adjetiva civil*”.

En consecuencia, se revocará la decisión apelada, para que el juzgado de primera instancia proceda al estudio de admisibilidad de la demanda, si la exigencia de la constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 621 del C. General del

Proceso. No habrá condena en costas dada su no causación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **REVOCA** el auto proferido por el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 14 de octubre de 2022, dentro del proceso de SERVIDUMBRE instaurado por INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. en contra de WILLIAM DE JESÚS TAMAYO PALACIO, para que el juzgado de primera instancia proceda al estudio de admisibilidad de la demanda, sin la exigencia de la constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 621 del C. General del Proceso.

Sin lugar a condena en costas dada su no causación.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado